

Escalada de violencia e impactos humanitarios anticipados en Manabí

PANORAMA DEL IMPACTO DE LA CRISIS

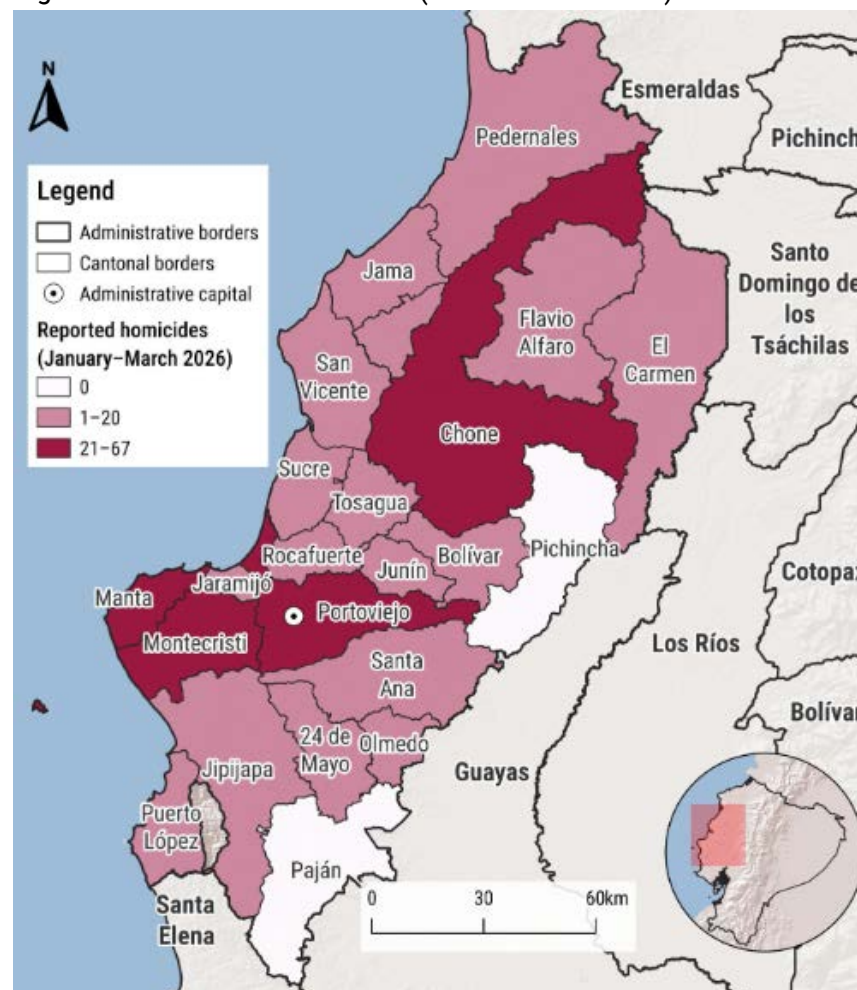
Entre enero y abril de 2026, Manabí registró 386 homicidios, equivalentes al 12,9% del total nacional. Si bien esto representa una leve desaceleración respecto al pico de finales de 2025 (474 homicidios entre septiembre y diciembre), se produce tras un marcado aumento interanual del 51% en 2025 (de 884 a 1.335) (FGE consultado el 13/04/2026). Lejos de indicar una desescalada, esta trayectoria señala que la violencia se está consolidando en niveles elevados sostenidos e implica tácticas diferenciadas: homicidios selectivos e irrupciones en hogares dirigidas contra rivales específicos, y ataques con alto número de víctimas orientados a intimidar a la población (Expreso 02/04/2026; Primicias 26/01/2026).

Para abril de 2026, los cantones más afectados de Manabí son Manta (105 casos), Portoviejo (79) y Montecristi (35), evidenciando focos de violencia persistentes, ya que estos cantones figuraban entre los cuatro con mayor número de homicidios en la provincia en 2025 (FGE consultado el 13/04/2026). En el corto plazo, es muy probable que la violencia permanezca concentrada en estos centros estratégicos, donde los grupos de delincuencia organizada (GDO) buscan afianzar su control.

La escalada en la letalidad y la coordinación de los ataques se refleja en una serie de incidentes recientes con múltiples víctimas en toda la provincia. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la violencia se intensificó en focos tradicionales como Manta y se extendió a cantones costeros e interiores que antes estaban menos afectados, como Jama y San Vicente (Primicias 01/01/2026; El Comercio 10/02/2026; Extra 23/02/2026). Esto apunta a una expansión estratégica de los GDO en busca de rutas logísticas y marítimas alternativas.

Solo en enero de 2026, al menos cuatro ataques simultáneos en Manta y Montecristi dejaron ocho personas muertas en menos de tres horas (Primicias 26/01/2026). La sincronización de estos eventos evidencia la alta capacidad operativa de los GDO en la provincia. Otros incidentes causaron al menos 18 homicidios en múltiples lugares en un período de 24 horas (CNN 12/01/2026). En lugar de eventos aislados, este patrón de ataques repetidos y de alta letalidad indica capacidades de planificación avanzada y una estructura de mando consolidada dentro de estos grupos.

Figura 1. Homicidios en Manabí (enero-marzo 2026)



Fuentes: ACAPS con datos de OCHA (consultado el 23/04/2026); FGE (consultado el 13/04/2026)

Descargo de responsabilidad: Para elaborar este mapa se utilizaron los límites administrativos de OCHA (OCHA consultado el 23/04/2026). Los límites, nombres y denominaciones que figuran en el mapa no implican el respaldo ni la aceptación oficial de ACAPS.

Es probable que esta escalada de violencia provoque más desplazamientos en Manabí. Los hogares huyen cada vez más debido a dos factores principales: la exposición directa a homicidios selectivos en zonas críticas de violencia y el desplazamiento anticipado en zonas aledañas, impulsado por el creciente temor a la violencia. La evidencia disponible indica que Manabí es simultáneamente una provincia de origen y destino para la población desplazada. Estos movimientos bidireccionales aumentan la complejidad de la crisis, lo que a menudo resulta en desplazamientos repetidos o secundarios (ACNUR/DP 31/07/2025).

La violencia se está expandiendo más allá de los centros urbanos hacia cantones periféricos y rurales, donde la presencia de seguridad es mínima y las autoridades carecen de recursos de protección. Como resultado, el desplazamiento se vuelve más disperso y menos visible: los movimientos ocurren en zonas más pequeñas y con menor monitoreo, lo que dificulta la identificación de necesidades y limita la cobertura de la respuesta humanitaria (ACNUR/DP 31/07/2025). La ausencia de mecanismos de monitoreo sistemático sigue limitando el registro de la población afectada, y el patrón disperso de los movimientos aumenta los riesgos de protección, incluyendo el desplazamiento sin asistencia, la exposición a la explotación y graves brechas en el acceso a servicios.

El control de los centros estratégicos de tránsito y exportación de Manabí para el narcotráfico transnacional es objeto de una creciente disputa, ya que la intensificación de la competencia territorial y logística entre los GDO por los puertos, las rutas marítimas y los nodos de distribución local está generando mayores niveles de violencia letal y disputas territoriales (El Diario 04/04/2026). En respuesta, los recurrentes estados de excepción, el más reciente en diciembre de 2025, han provocado un mayor despliegue militar que facilita operaciones de seguridad a gran escala y restricciones a la movilidad. También, la presión de las estructuras de liderazgo y la desarticulación de los bastiones establecidos podría resultar en el desplazamiento la actividad de los GDO, incrementando la fragmentación y desencadenando mayor violencia (InSight Crime 31/03/2026; France 24 01/01/2026).

Si bien la violencia se expande territorialmente por toda la provincia, Manta sigue siendo el principal epicentro (Primicias 18/01/2026). En la ciudad, los enfrentamientos entre GDO se concentran especialmente en barrios costeros del norte y el centro. Esta concentración en zonas costeras probablemente tenga como resultado un desplazamiento localizado y restricciones de acceso para los trabajadores humanitarios (EIC 20/04/2026).

Las recientes inundaciones y la emergente sequía localizada ocurren de forma secuencial en el tiempo, aunque sus impactos geográficos se superponen en algunas zonas. Estos choques climáticos combinados afectan principalmente los medios de vida agrícolas y pesqueros, y al mismo tiempo restringen gravemente el acceso al agua y a la atención médica (El Diario 07/04/2026; ACNUR 26/03/2026). A medida que los medios de vida se deterioran, los hogares que enfrentan graves brechas de ingresos se ven cada vez más obligados a depender de economías o préstamos informales controlados por los GDO para cubrir sus necesidades básicas. Esta dependencia financiera se convierte rápidamente en deudas inmanejables, lo que permite a los GDO utilizar la coerción como una herramienta directa de reclutamiento, explotación y extorsión.

Persisten brechas de información significativas para riesgos clave de protección, esto se relaciona con las restricciones de acceso y el miedo a represalias. En particular, la verdadera prevalencia de la violencia basada en género (VBG), la magnitud real del desplazamiento interno y los límites exactos del control territorial de los GDO, los cuales siguen siendo puntos ciegos analíticos de gran importancia. El subregistro limita la capacidad para anticipar cambios en los patrones de violencia y en las restricciones de acceso, afectando la focalización de la asistencia y la priorización de las zonas de alto riesgo por parte de los trabajadores humanitarios, lo que aumenta la probabilidad de intervenciones tardías y errores de focalización en los próximos meses.

TABLA DE CONTENIDOS

Panorama del impacto de la crisis	1
Alcance y escala previstos	3
Factores impulsores de la crisis	3
Factores agravantes.....	3
Impactos (actuales y previstos).....	5
Respuesta humanitaria.....	9

ALCANCE Y ESCALA PREVISTOS

En respuesta a la reciente militarización por parte del Estado, los GDO en Manabí están trasladando sus operaciones y dispersándose hacia áreas periféricas. Este cambio táctico está ampliando el alcance geográfico de la violencia más allá de las disputas tradicionales entre bandas por las economías ilegales. A medida que las operaciones estatales se intensifican y desarticulan los bastiones establecidos, es probable que la violencia se desplace hacia cantones periféricos con poca presencia estatal (EIC 20/04/2026; InSight Crime 21/01/2025). Como resultado, es probable que los GDO adapten sus estrategias y se reubiquen para mantener sus redes de extorsión e intimidación, enfocándose cada vez más en las rutas marítimas y los pescadores artesanales (El Diario 04/04/2026; Machala Móvil 06/04/2026).

A medida que los GDO consolidan el control territorial y los habitantes pierden opciones de medios de vida seguros, se prevé que el aumento resultante de la extorsión y los homicidios selectivos acelere el desplazamiento forzado hacia otras provincias.

FACTORES IMPULSORES DE LA CRISIS

Economías ilegales y fragmentación de los GDO

La expansión de las economías ilegales, en particular el narcotráfico, es uno de los principales impulsores de la crisis en Manabí. A medida que la provincia consolida su papel como un corredor marítimo estratégico que conecta los flujos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos, los GDO recurren cada vez más a la violencia altamente letalidad, como la eliminación de rivales, para asegurar el control sobre estas lucrativas rutas de tráfico y cadenas logísticas (Machala Móvil 06/04/2026; InSight Crime 21/01/2025).

Es probable que este valor estratégico intensifique la competencia entre los GDO por el control logístico de las rutas, el control territorial de los puertos y la extracción de ingresos a través de las redes de distribución. Las incautaciones de drogas a gran escala registradas a principios de 2026 en todo Ecuador sugieren niveles sostenidos de actividad, donde las operaciones — incluidos los pagos de transporte y el uso

de negocios locales para el lavado de dinero o el almacenamiento — aumentan el riesgo de trabajo forzado y explotación (Machala Móvil 06/04/2026; El Diario 04/04/2026; InSight Crime 31/03/2026).

Los arrestos de líderes clave están fragmentando a los GDO en Manabí y desarticulando sus estructuras de mando, lo que genera violencia a medida que las facciones compiten por el control territorial y económico (Primicias 18/01/2026). Este proceso ha aumentado la frecuencia y la propagación geográfica de los incidentes. Durante los próximos tres a seis meses (mayo-noviembre de 2026), es probable que la violencia se disperse hacia nuevas zonas a medida que las facciones compiten por las rutas de tráfico y las fuentes de ingresos.

FACTORES AGRAVANTES

Militarización y adaptaciones tácticas de los GDO

Los recurrentes estados de excepción y los despliegues militares a gran escala están impulsando a los GDO a descentralizar sus operaciones e instalarse en zonas residenciales. Este cambio táctico implica el traslado de actividades y una mayor dispersión operativa (Primicias 18/01/2026; ED 16/01/2026). En cantones con altamente militarizados, como Manta y Portoviejo, estos grupos podrían estar trasladando actividades a zonas residenciales para evadir las patrullas militares, lo que potencialmente aumenta la exposición de la población civil a riesgos de protección, específicamente a la coerción y al fuego cruzado (EIC 20/04/2026).

Estos riesgos se ven agravados por dos factores distintos: los toques de queda impuestos por el Estado y las restricciones autoimpuestas derivadas del temor a la violencia de los GDO. Juntos, estos factores impiden que los residentes abandonen sus barrios, utilicen rutas de tránsito clave y se reubiquen cuando la violencia se intensifica, al tiempo que cortan el acceso a servicios esenciales como la atención médica, los mercados y la asistencia humanitaria (InSight Crime 31/03/2026; El Comercio 03/03/2026).

El sistema penitenciario en Ecuador funciona ampliamente como centro de reclutamiento y coordinación para los GDO (InSight Crime 31/03/2026; ICG 12/11/2025). Las detenciones masivas durante las operaciones de seguridad del Estado podrían

reforzar involuntariamente estas redes, ya que los centros penitenciarios reciben una gran afluencia de detenidos, lo que amplía el número de personas disponibles para el reclutamiento por parte de los GDO y les permite establecer nuevas estructuras de liderazgo o formar nuevas facciones. En los próximos tres a seis meses, se espera que estas dinámicas aumenten la frecuencia y la imprevisibilidad de los incidentes violentos, desplazando potencialmente la violencia hacia áreas periféricas y rurales, y aumentando la exposición de la comunidad a amenazas de protección y ataques selectivos (InSight Crime 31/03/2026; EIC 26/02/2026).

Vulnerabilidades socioeconómicas preexistentes

La pobreza y el subempleo limitan la capacidad de los hogares para absorber los choques económicos, mientras que las brechas en salud, educación y acceso a mercados empujan a las comunidades hacia las economías ilegales. En los cantones periféricos donde la presencia estatal es limitada y las alternativas de ingresos son escasas, esta dependencia financiera aumenta la exposición a la coerción, la extorsión y el reclutamiento por parte de los GDO (ACLEED 03/06/2025; El Comercio 04/03/2026). A medida que la violencia se expande hacia estas zonas ya económicamente precarias, es probable que las redes de apoyo local se debiliten, dejando a las comunidades con menos recursos para hacer frente a la situación y complicando aún más la respuesta humanitaria.

Clima y amenazas naturales

Para mayo de 2026, las condiciones neutrales del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur estaban presentes y se espera que persistan durante abril-junio en Ecuador. Se proyecta que El Niño surja a mediados de 2026, con posibilidad de incrementar las lluvias en las zonas costeras —incluida Manabí— hacia finales del año (NOAA 04/05/2026).

El impacto residual de las graves inundaciones y deslizamientos de tierra ocurridos entre enero y marzo de 2026 sigue agravando las restricciones de acceso, afectando los medios de vida y desplazando comunidades. Estos eventos afectaron a más de 80.000 personas en Ecuador, siendo Manabí una de las provincias más impactadas. Los cantones más golpeados: Chone, Flavio Alfaro, Manta, Portoviejo y Sucre; comparten un patrón de alta exposición a inundaciones, agravado por

déficits preexistentes en infraestructura de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH por sus siglas en inglés) (OCHA 16/03/2026; El Comercio 14/03/2026; Ecuavisa 03/03/2026). Es fundamental señalar que estas zonas se superponen geográficamente con los principales focos de violencia de los GDO. Por lo tanto, se espera que los extensos daños en viviendas, plantas de tratamiento de agua y redes viales agraven las restricciones de acceso existentes y aumenten la exposición de la población a amenazas de protección durante los próximos tres a seis meses.

Este efecto combinado probablemente interrumpa el acceso humanitario a través del deterioro de las vías, la inseguridad en las rutas de suministro y las limitaciones logísticas. Se prevé que la consiguiente pérdida de medios de vida, la reducción del acceso a mercados y el aumento del costo de los bienes básicos incrementen la exposición a la explotación, el desplazamiento y la VBG.

En los cantones no afectados directamente por las inundaciones, la escasez hídrica localizada desde principios de abril de 2026 ha comenzado a afectar el ganado, generando choques climáticos geográficamente distintos, pero temporalmente superpuestos en la provincia. Como mecanismo de afrontamiento, los hogares agrícolas recurren cada vez más a la venta forzada de animales y al endeudamiento no regulado, mecanismos que erosionan los activos productivos y arriesgan perpetuar los ciclos de deuda, profundizando la vulnerabilidad económica a largo plazo de los hogares (El Diario 04/04/2026 y 07/04/2026). A medida que los medios de vida agrícolas se deterioran, el reclutamiento y la explotación por parte de los GDO puede surgir como una de las pocas opciones de supervivencia disponibles para los hogares económicamente vulnerables.

IMPACTOS (ACTUALES Y PREVISTOS)

Protección

Se prevé que la escalada de violencia en Manabí intensifique los riesgos de protección en los próximos meses, incluidos el reclutamiento, el desplazamiento y la VBG, a medida que los GDO consolidan el control territorial mediante la extorsión, la intimidación y la vigilancia comunitaria (Primicias 24/01/2026). La violencia ocurre cada vez más en espacios privados y comunitarios, lo que incrementa la exposición de la población civil a homicidios selectivos e intimidación. Incidentes recientes en cantones como Manta y Jipijapa muestran un patrón de incursiones armadas en hogares y ataques durante reuniones sociales (Expreso 02/04/2026; Primicias 26/01/2026). Este cambio reduce la seguridad relativa de los entornos residenciales, limitando la capacidad de los residentes para buscar refugio dentro de sus propias comunidades y evidenciando el uso de la violencia como herramienta de intimidación.

La fragmentación de los GDO y las disputas territoriales impulsan actos de violencia cada vez más extremos que parecen destinados a infundir miedo, como la exhibición pública en enero de 2026 de cinco cabezas cercenadas en una playa de Puerto López, acompañadas de mensajes amenazantes (CNN 12/01/2026). Este tipo de violencia desincentiva la denuncia e incrementa la sumisión de las comunidades afectadas.

En centros urbanos como Manta y Portoviejo, los GDO han instalado sistemas de vigilancia —casi 200 cámaras mapeadas entre 2025 y principios de 2026, de las cuales al menos 135 siguen activas— para monitorear a las comunidades y a las fuerzas de seguridad en tiempo real (Primicias 24/01/2026). Este nivel de vigilancia probablemente profundice el control coercitivo, con efectos observables que incluyen la restricción de movimientos entre barrios, la reducción de la presencia en espacios públicos y las barreras para denunciar incidentes o buscar asistencia. A medida que las comunidades se dan cuenta de que están siendo monitoreadas, el miedo a las represalias desincentiva el contacto con las fuerzas de seguridad y las organizaciones humanitarias. Según un informante clave, las comunidades reportan menor confianza en las autoridades, temor a abusos y barreras para acceder al apoyo estatal o humanitario (EIC 20/04/2026).

Las tendencias recientes en amenazas, extorsión y secuestros extorsivos reflejan aún más la consolidación del control de los GDO. Entre enero y abril de 2026, Manabí registró 716 casos de amenazas, 234 casos de extorsión y 12 secuestros extorsivos, con la mayor concentración en Manta y Portoviejo (FGE consultado el 17/04/2026). Esto se suma a niveles ya elevados entre septiembre y diciembre de 2025, cuando se reportaron 794 amenazas, 312 casos de extorsión y 10 secuestros extorsivos (FGE consultado el 17/04/2026). Los datos adicionales de los registros de llamadas de emergencia también indican una tendencia al alza, con 41 reportes relacionados con extorsión en diciembre de 2025 y 57 en enero de 2026 (ECU911 consultado el 22/04/2026 a; ECU911 consultado el 22/04/2026 b).

Las altas tasas de homicidios y la precariedad socioeconómica impulsan una dinámica de desplazamiento dual en Manabí: salida simultánea de cantones afectados por la violencia y entrada de personas hacia centros urbanos. Mientras que cantones como Pedernales experimentan una pérdida de población sostenida, otros, como Manta, actúan como puntos de tránsito y destino para personas que huyen de la violencia en Esmeraldas, Guayas y El Oro (EIC 20/04/2026; ACNUR/DP 31/07/2025).

En ausencia de mecanismos formales de respuesta al desplazamiento, las personas desplazadas dependen en gran medida de acogida por parte de familiares y conocidos. Esto ejerce una presión adicional sobre hogares ya vulnerables, reduciendo su capacidad para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y acceso a servicios de salud, y aumentando los riesgos de protección tanto para las personas desplazadas como para las comunidades de acogida. Los datos sobre desplazamiento siguen siendo limitados, aunque un informante clave señaló un aumento desde 2024. La falta de sistemas formales de monitoreo y un marco regulatorio claro restringe la visibilidad y la capacidad de respuesta, lo que conduce a un subregistro significativo (EIC 20/04/2026).

Los NNA enfrentan mayores riesgos de reclutamiento por parte de los GDO, particularmente en comunidades marginadas donde la presencia del Estado y el acceso a los servicios siguen siendo limitados. En estas zonas, los grupos criminales ejercen control sobre las comunidades mediante coerción, amenazas e incentivos económicos, lo que facilita el reclutamiento sistemático de jóvenes (EIC 20/04/2026). Los datos del primer trimestre de 2026 refuerzan esta tendencia: entre enero y marzo se registraron 16 delitos con participación de menores en Manabí,

lo que representa un aumento del 60% respecto al mismo período de 2025 (MDI consultado el 29/04/2026). En marzo de 2026, un adolescente de 13 años participó en un homicidio selectivo (Primicias 18/03/2026).

Los GDO se dirigen cada vez más hacia adolescentes para ejecutar extorsiones y otras actividades de alto riesgo, explotándolos mediante pagos en efectivo o acceso a drogas (Panorama Ecuador 17/02/2026; UNICEF 06/2025). El deterioro de los medios de vida y la escasez de opciones generadoras de ingresos son causantes principales del reclutamiento por parte de los GDO en múltiples grupos etarios. Más allá de la captación de menores, los jóvenes adultos enfrentan una presión creciente, ya que los incentivos económicos y los beneficios materiales se convierten en una de las pocas estrategias de supervivencia viables entre las personas desplazadas, migrantes y refugiadas, cuya situación irregular y redes de apoyo limitadas aumentan aún más su exposición a la coerción y la explotación (EIC 20/04/2026).

Las limitaciones percibidas del sistema penal, incluidos los marcos legales existentes para menores y la rápida liberación de personas acusadas de delitos, pueden permitir que los GDO continúen reclutando adolescentes asumiendo un riesgo relativamente bajo (Panorama Ecuador 17/02/2026; ICG 12/11/2025).

Las mujeres y las niñas enfrentan una mayor exposición a la violencia, incluidas la VBG y la explotación, en zonas con fuerte presencia de GDO, ya que el dominio territorial y las brechas de servicios generan riesgos de protección específicos (EIC 20/04/2026; ACAPS 16/04/2026; OCHA 24/02/2026). Manabí registró 11 femicidios entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, tras un marcado aumento de 39 casos en 2024 (cuando la provincia ocupó el segundo lugar a nivel nacional) a 70 en 2025 (ALDEA consultado el 20/04/2026). La información disponible sugiere que la inseguridad persistente y la presencia de los GDO podrían contribuir a mantener niveles elevados de VBG. Las amenazas y el miedo a represalias desalientan a las sobrevivientes a denunciar los incidentes, mientras que la inseguridad y la limitada disponibilidad de servicios restringen el acceso a asistencia segura (EIC 20/04/2026; EIC 20/02/2026; EIC 06/02/2026).

En centros turísticos como Manta, los patrones de explotación sexual —que afectan especialmente a niñas y adolescentes— están vinculados al control de los GDO sobre las economías informales y los sectores de entretenimiento, facilitando la explotación coercitiva y transaccional (EIC 20/04/2026). Se prevé que las mujeres y

niñas, especialmente las migrantes y refugiadas, enfrenten riesgos compuestos derivados de su situación irregular, el acceso limitado a servicios y la reducción de sus redes de protección, lo que aumenta su exposición a la explotación (EIC 20/04/2026). Es probable que los riesgos de VBG se mantengan elevados en las zonas afectadas. Las sobrevivientes enfrentan múltiples barreras para denunciar, entre ellas el miedo a represalias, el estigma, la situación migratoria irregular y la disponibilidad limitada de servicios seguros y confidenciales, lo que también restringe el acceso a la asistencia.

Medios de vida y seguridad alimentaria

Los medios de vida en Manabí —especialmente la pesca, la agricultura y el comercio a pequeña escala— están bajo una presión creciente por el impacto combinado de la extorsión recurrente, la inseguridad y las pérdidas de cosechas relacionadas con el clima. En 2025, Manabí registró la tasa de subempleo más alta del país, con un 28,5%, un aumento respecto a 2024 que contrasta directamente con la tendencia nacional a la baja (INEC consultado el 29/04/2026). Esta base de ingresos insuficientes y condiciones laborales precarias limita la capacidad de afrontamiento de los hogares. A medida que las actividades económicas tradicionales se vuelven menos viables, la población afectada enfrenta un mayor riesgo de verse forzada a recurrir a estrategias de supervivencia vinculadas a los GDO, como la explotación o el reclutamiento.

Más allá de la violencia directa, la interferencia de los GDO en las cadenas de suministro legítimas, en especial mediante la extorsión de transportistas y negocios locales, erosiona la rentabilidad de las actividades generadoras de ingresos legales al imponer cuotas de extorsión, interrumpir las rutas de transporte y forzar costos operativos adicionales. Este cambio económico empuja a los hogares hacia estrategias de afrontamiento con efectos potencialmente nocivos, como el recurso a préstamos informales con altos intereses, el uso de rutas de transporte inseguras para los bienes y las mercancías, así como la reducción del consumo de alimentos (Euavisa 06/04/2026; ACNUR 29/10/2025).

Estas interrupciones afectan directamente la seguridad alimentaria de dos maneras. En primer lugar, la extorsión recurrente obliga a los productores a priorizar su seguridad personal sobre la producción, lo que se traduce en una reducción

de las salidas de pesca y en el abandono temporal de tierras, disminuyendo la disponibilidad local de alimentos (ACAPS 11/08/2025). En segundo lugar, el poder adquisitivo y la liquidez se reducen a medida que los costos de extorsión a lo largo de la cadena de suministro se trasladan a los consumidores a través de precios más altos. Las comunidades costeras enfrentan riesgos especialmente altos para sus medios de vida, ya que más de la mitad de la población depende de la pesca como principal fuente de ingresos (Primicias 05/04/2026; CIF 07/11/2024).

Estos impactos en la seguridad alimentaria y los medios de vida se ven agravados por las amenazas climáticas, que afectan periódicamente la infraestructura de transporte, aíslan provincias y cantones, e interrumpen la producción agrícola y el suministro a los mercados, al tiempo que reducen los ingresos de las comunidades en riesgo (CIF 07/11/2024; BM 29/04/2026).

Para mediados de abril de 2026, una prolongada temporada seca amenazó hasta el 77% de los cultivos de maíz de Manabí, principalmente en Tosagua (Ecuavisa 16/04/2026). En lugar de ser un breve choque estacional, se espera que esta grave pérdida tenga un impacto sostenido, restringiendo los ingresos de los hogares y la disponibilidad local de alimentos hasta el próximo ciclo de cosecha.

La escalada de las actividades extorsivas y coercitivas de los GDO está reduciendo la rentabilidad de la pesca legal. Los pescadores artesanales son forzados a pagar cuotas de extorsión, unirse a los GDO o a transportar droga, mientras que pagos elevados de entre USD 60.000 y 100.000 por viaje actúan como incentivos coercitivos para los hogares con pocas alternativas económicas (Machala Móvil 06/04/2026; Primicias 05/04/2026).

El deterioro de los medios de vida afecta directamente la seguridad alimentaria y nutricional, ya que la reducción del poder adquisitivo obliga a los hogares a disminuir el consumo general de alimentos y a depender de dietas más baratas y menos nutritivas. Si bien no se dispone de datos recientes, las cifras de octubre de 2024 a marzo de 2025 evidencian vulnerabilidades preexistentes altas en el acceso a los alimentos: el 36% de la población de Manabí (más de 617,000 personas) se enfrentó a niveles de inseguridad alimentaria de Estrés (IPC Fase 2) y el 19% (casi 326,000 personas) se enfrentó a niveles de Crisis (IPC Fase 3) o superiores (CIF 04/06/2025).

En cantones con alta dependencia del agua comprada, como Jaramijó, la reducción de los ingresos probablemente obligará a los hogares a hacer concesiones críticas en sus gastos (Primicias 05/04/2026). Las familias pueden verse obligadas a elegir entre reducir la compra de alimentos para costear agua potable segura o depender de fuentes de agua inseguras para mantener su consumo de alimentos. Ambas estrategias de afrontamiento aumentan el riesgo de desnutrición: la reducción de la ingesta alimentaria disminuye la nutrición de base, mientras que la exposición a agua no segura incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, las cuales impiden la absorción de nutrientes. Estos factores combinados podrían afectar de manera desproporcionada a las poblaciones con acceso limitado a servicios básicos, apoyo legal y medios de vida, como las personas desplazadas, migrantes y refugiadas.

Salud y Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, por sus siglas en inglés)

La escalada de la violencia armada restringe las cadenas de suministro médico y la movilidad del personal de salud, comprometiendo la capacidad del sistema sanitario en Manabí. Esta situación se agrava cuando los brotes de enfermedades asociados al clima requieren una mayor capacidad de respuesta. La convergencia entre la capacidad del sistema de salud y el aumento de la demanda agudiza las vulnerabilidades preexistentes. Para finales de 2025, los nueve hospitales de la provincia ya registraban hasta un 75% de desabastecimiento de medicamentos en algunas instalaciones, retrasos en el pago de salarios al personal médico y capacidad operativa reducida (El Universo 22/08/2025; Ministerio de Salud Pública 08/01/2025). Enfrentar la escalada de violencia de 2026 con estos déficits preexistentes en personal, insumos médicos e infraestructura, conlleva a que la capacidad del sector de salud para absorber los casos de trauma actuales y los previstos brotes de enfermedades sea aún más limitada.

Además, si la violencia continúa escalando, el probable aumento de casos relacionados con trauma, como las heridas por arma de fuego, podría saturar los servicios ya sobrecargados. También, el sistema debe gestionar una alta carga epidemiológica, particularmente de enfermedades vectoriales: a finales de abril de 2026, Manabí registró la tercera tasa de incidencia de dengue más alta del país (125,8 casos por 100.000 habitantes) (Ministerio de Salud Pública 25/04/2026).

Esta prevalencia sostenida, agravada por las recientes inundaciones y el deficiente drenaje que expanden los criaderos de vectores, limita gravemente la capacidad del sector para responder a brotes adicionales de enfermedades. La infraestructura WASH deteriorada —incluidas fuentes de agua comprometidas e instalaciones sanitarias inadecuadas—, combinada con las condiciones de hacinamiento, también crea un escenario que facilita la transmisión de enfermedades respiratorias y transmitidas por el agua, como lo evidencian los casos reportados de leptospirosis y tifoidea (IFRC 28/03/2026).

La escalada de la violencia podría redirigir los escasos recursos médicos de la atención de rutina y preventiva hacia la respuesta de emergencia ante traumas. Esto podría aumentar la morbilidad prevenible y generar una reducción de la atención de rutina, así como la interrupción de otros servicios en el corto plazo, especialmente en zonas urbanas de alto riesgo. La inseguridad en cantones como Manta restringe activamente el acceso a la atención médica, retrasando la movilidad de las ambulancias y la atención crítica de emergencias (IFRC 28/03/2026).

Es probable que las necesidades de salud mental en Manabí aumenten en los próximos tres a seis meses, ya que la exposición sostenida a la violencia, el miedo y la fragmentación social sigue siendo alta. Esto se refleja en el creciente temor de las comunidades, donde las personas evitan salir de sus hogares, enviar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica. Lo anterior se ve agravada por incidentes de seguridad específicos, como los homicidios selectivos ocurridos dentro de instalaciones hospitalarias en Manta, que desincentivan la búsqueda de atención (EIC 20/04/2026; Expreso 02/08/2024).

El acceso a la atención médica especializada y el apoyo psicosocial comunitario están gravemente restringidos, especialmente en cantones con alta violencia como Manta. Las amenazas directas y la extorsión están provocando la salida creciente de especialistas médicos de la provincia, mientras que el personal restante se niega cada vez más a atender casos de trauma de alto riesgo (EIC 20/04/2026). Esta situación probablemente se traduzca en un deterioro concreto a nivel comunitario, como el ausentismo escolar prolongado entre los NNA expuestos a la violencia, el retiro de los espacios comunales y públicos por miedo y angustia psicológica no atendida, y la interrupción progresiva de las actividades económicas cotidianas a medida que las personas afectadas pierden su capacidad funcional.

Si bien no se dispone de cifras exhaustivas recientes, los datos de 2024 evidencian los graves déficits estructurales que subyacen a la actual crisis de WASH en Manabí: en ese momento, solo el 64,4% de los hogares tenía acceso a saneamiento básico y apenas el 52,2% estaba conectado a redes de alcantarillado (UNICEF consultado el 13/04/2026; UNICEF 06/2023). Estas brechas estructurales se agravaron aún más en 2025, cuando el déficit de agua y la interrupción del suministro afectaron al menos a 12 cantones, incluidos Manta, Montecristi y Portoviejo, dejando a algunos hogares periféricos sin acceso confiable hasta por ocho meses (Primicias 03/01/2025; El Diario 09/03/2025). A medida que estas vulnerabilidades de infraestructura se cruzan con los choques climáticos de 2026, se proyecta que las condiciones de WASH en Manabí se deterioren aún más. Esto implicará una disminución de la cobertura de agua potable por tubería, un deterioro de la calidad del agua debido al mantenimiento deficiente de la infraestructura de tratamiento, y una reducción del acceso físico a servicios seguros de agua y saneamiento, especialmente en zonas rurales y barrios urbanos periféricos que ya enfrentan escasez crónica (Primicias 03/01/2025; El Universo 09/03/2026).

Educación

El aumento de la violencia y la presencia de los GDO en Manabí incrementan los riesgos en los entornos escolares, afectando específicamente la seguridad, la supervisión y el acceso físico a los espacios educativos. En Manta, Pedernales y Portoviejo, estas dinámicas están generando deserción escolar y reclutamiento infantil. Los GDO captan continuamente a NNA a edades cada vez más tempranas a través de mecanismos coercitivos, con algunos casos ocurriendo dentro y en los alrededores de las escuelas (Primicias 18/03/2026; Panorama Ecuador 17/02/2026). Si bien los factores estructurales propios de Manabí —como el trabajo infantil, la pobreza vinculada a la informalidad en la pesca y la agricultura, la conectividad limitada y el acceso restringido a tecnología en zonas rurales y costeras— crean vulnerabilidades de base, la escalada de la violencia actúa probablemente como un factor agravante clave de la disrupción educativa en 2026, acelerando la deserción escolar y aumentando la exposición de los NNA al reclutamiento (El Diario 12/05/2025; UNICEF 06/2023).



Se observa un creciente desplazamiento hacia el aprendizaje a distancia y un aumento de la deserción escolar en Manabí, especialmente en cantones donde la inseguridad se ha intensificado. En Portoviejo y Manta, algunas escuelas ya han hecho la transición a clases virtuales en respuesta a las amenazas de seguridad, y se reportan numerosos casos de reclutamiento en entornos educativos en Pedernales (EIC 20/04/2026). La extorsión de docentes ha obligado a muchos educadores a reubicarse en zonas rurales de Manabí, lejos de las áreas controladas por los GDO, lo que conlleva a una escasez de personal docente y afecta directamente la prestación de servicios educativos y reduce el acceso de los estudiantes en las comunidades afectadas (La Marea 18/06/2025). Es probable que estas dinámicas profundicen las desigualdades en el acceso a la educación, en particular para los estudiantes sin conectividad ni entornos de aprendizaje seguros en el hogar, con frecuencia en zonas rurales.

Tanto en zonas urbanas como rurales, el miedo al fuego cruzado y la presencia de fronteras invisibles, las cuales son divisiones territoriales informales que restringen la circulación entre barrios, probablemente impidan cada vez más que los NNA asistan a la escuela. Este riesgo se agrava en las zonas rurales, donde los estudiantes deben recorrer largas distancias a través de zonas inseguras con infraestructura deteriorada, y donde las inundaciones y los daños en las vías podrían interrumpir las rutas de acceso seguro a los centros educativos. Esta situación afecta no solo a Manabí, sino también a los cantones de Guayaquil, Huaquillas y Machala (El Diario 12/05/2025; NRC 26/06/2025; BM 29/04/2026). Se prevé que las tasas de asistencia y progresión escolar disminuyan, ya que las ausencias reiteradas y las interrupciones prolongadas aumentan la probabilidad de deserción permanente, particularmente entre los NNA que ya están expuestos a los GDO, reforzando los riesgos de trabajo infantil y reclutamiento.

Esta tendencia se produce en un contexto de violencia creciente que afecta a los NNA, con un aumento de los homicidios en el grupo de 0 a 17 años en Manabí del 4,14% del total de muertes en 2024 al 5,19% en 2025 (MDI consultado el 23/04/2026). Esto evidencia a alta exposición de los NNA a la violencia letal, y el miedo y las restricciones a la movilidad afectan adicionalmente la asistencia escolar y aumentan los riesgos de protección. Por lo tanto, el ausentismo no debe interpretarse como un simple reflejo del rendimiento académico, sino como un indicador de inseguridad.

RESPUESTA HUMANITARIA

Restricciones humanitarias

Es probable que, en Manabí, tanto el control territorial de los GDO junto con las operaciones militares agraven aún más la situación humanitaria en los próximos tres a seis meses de 2026, lo que podría empeorar las limitaciones operativas y el riesgo de restricciones al acceso humanitario. Zonas urbanas como Manta, Pedernales y Portoviejo son especialmente vulnerables por los toques de queda y los límites territoriales de facto de los GDO (OCHA 24/02/2026).

La presencia constante de los GDO en la vida comunitaria y la imposición de mecanismos de control social puede resultar en un afianzamiento aún más el miedo a las represalias, la vigilancia social y la coerción, reduciendo la disposición de las comunidades a interactuar con las organizaciones humanitarias. Las comunidades bajo la influencia de los GDO pueden rechazar por completo la intervención externa por temor a represalias o por una negativa activa a relacionarse, lo que se traduce en mayor subregistro, acceso limitado para las evaluaciones de necesidades y brechas de información crecientes.

Estas limitaciones se extienden directamente a las evaluaciones de riesgos de protección, ya que cuestiones como el reclutamiento y la explotación a menudo requieren enfoques de programación indirecta —como actividades artísticas y metodologías psicosociales— para facilitar un contacto seguro con las comunidades y apoyar la recopilación de información (EIC 20/04/2026; OCHA 24/02/2026). Como resultado, es probable que las poblaciones en zonas de alto riesgo enfrenten riesgos de protección crecientes derivados del mayor control de los GDO, con una capacidad reducida para acceder a servicios, buscar asistencia o denunciar de forma segura sus preocupaciones de protección.

Financiación y capacidad de respuesta

Es poco probable que la capacidad de respuesta humanitaria satisfaga las necesidades crecientes, especialmente en protección y medios de vida, lo que se traducirá en una cobertura geográfica reducida y una menor disponibilidad de servicios en las zonas de alto riesgo. Para febrero de 2026, solo se había asegurado el 11% de los USD 65.1 millones requeridos para Ecuador, lo que limita la escala y la sostenibilidad de las intervenciones, particularmente en cuanto a protección y asistencia para personas refugiadas y desplazadas (IFRC 28/03/2026; ACNUR 26/03/2026).

En Manabí, los recientes esfuerzos de respuesta para atender las crecientes necesidades incluyen la activación de un Plan de Respuesta Provincial y albergues de emergencia que ofrecen servicios básicos (IFRC 28/03/2026). Sin embargo, los recortes globales de financiación ya han reducido la presencia de organizaciones humanitarias en la provincia, generando una brecha de capacidad en servicios especializados de protección, especialmente para personas migrantes y refugiadas (EIC 20/04/2026). Estos servicios son esenciales para obtener estatus legal, que a su vez facilita el acceso a servicios básicos, empleo formal y asistencia humanitaria (EIC 20/04/2026; ACNUR 26/03/2026). La reducción de los servicios especializados de protección probablemente limitará la capacidad de las personas para regularizar su situación, lo que conllevará exclusión de los servicios básicos y de medios de vida, así como mayor exposición a la explotación y otros riesgos de protección, incluidos el reclutamiento y uso, el desplazamiento y la VBG.

Se prevé que estos impactos sean más graves para las personas desplazadas, migrantes y refugiadas, que dependen más de estos servicios dada su falta de redes de apoyo y las barreras preexistentes, como la ausencia de estatus legal, para acceder a sus derechos. También existe información limitada sobre el alcance y la cobertura de las respuestas que abordan los medios de vida y la seguridad alimentaria en 2025–2026, lo que evidencia una brecha de información sobre la respuesta y no necesariamente una ausencia confirmada de intervenciones.

Acceso a información

En las zonas con acceso restringido, el subregistro motivado por el miedo agrava las brechas de información, lo que dificulta que el personal de respuesta humanitaria evalúe las necesidades y priorice las intervenciones (EIC 20/04/2026; ACNUR 28/04/2026).

Persisten brechas de información clave sobre la escala y ubicación de los desplazamientos, los secuestros, la VBG y el control territorial de los GDO, lo que afecta directamente la toma de decisiones en materia de focalización y priorización. Es probable que estas brechas generen evaluaciones incompletas, una asignación inadecuada de recursos y retrasos en la respuesta, ya que las necesidades en zonas de alto riesgo o inaccesibles siguen sin identificarse debido al temor a represalias y a las restricciones en los mecanismos de denuncia. Como resultado, las necesidades emergentes pueden identificarse de forma tardía y es posible que la asistencia no llegue a quienes más la necesitan.